

**EL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y  
LA PROTECCIÓN DE LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS.  
LA LABOR DEL *CONSELL DE L'AUDIOVISUAL***

Àlex Seglers

*Profesor. Universitat Autònoma de Barcelona*

**Abstract:** After the “Mohammad Cartoons” controversy, lawyers have been paying attention to analysing the limits of freedom of speech. In this article, Professor Àlex Seglers comments on Ruling 12/05 of the Audiovisual Council of public television in Catalonia. The E-Cristians Platform submitted a complaint with this Agency holding that the main character in the successful series “Porca misèria” made highly derogatory statements against the Catholic Church. The author speculates as to whether the religious feelings of Catholic viewers were offended.

**Keywords:** Constitutional Law, Freedom of Religion, Freedom of Speech, Libel, Catalanian Regulations.

**Resumen:** Después de las protestas surgidas con motivo del conocido affaire de las “caricaturas de Mahoma”, los juristas se han aprestado a revisar de nuevo las normas y criterios acerca de los límites de la libertad de expresión. Este artículo tiene por objeto comentar la norma 12/05 del Consejo Audiovisual de Televisión Pública de Cataluña. La Asociación privada “E-Cristians” presentó una queja ante dicho Consejo por entender que una exitosa serie televisiva efectuaba afirmaciones despectivas de la Iglesia católica. El autor estudia en el artículo la posible ofensa contra los sentimientos religiosos.

**Palabras clave:** Libertad religiosa, Libertad de expresión, Delitos contra los sentimientos religiosos, Normativa administrativa sobre medios audiovisuales.

**SUMARIO:** 1. Preliminar.– 2. El Control Democrático de la libertad de expresión: El *Consell de L'audiovisual de Catalunya*.– 3. Anexo: *Els criteris en matèria de tractament del fet religiós en els programes audiovisuals d'entreteniment y la decisió 12/05, Assumpte: telesèrie “Porca misèria”*.

## 1. PRELIMINAR

En los últimos años han arreciado las polémicas por los posibles excesos en la libertad de expresión. El trágico episodio de las “caricaturas de Mahoma”, que el diario danés *Jyllands Posten* publicó hace meses, demuestra que, en democracia, las identidades religiosas no son –no pueden ser– invisibles o irrelevantes. En sociedades multiculturales es posible que no todas las personas estén de acuerdo en el significado de la libertad (también la de expresión); en estos casos, y mientras no se llegue a un consenso básico a partir de un diálogo intercultural sincero y veritativo, habrá que empezar por la responsabilidad y el respeto mutuos<sup>1</sup>. De lo contrario, podría peligrar la convivencia entre las diferentes culturas religiosas que a menudo se ubican tentacularmente en un mismo espacio jurídico-político. Ni se debe utilizar la libertad de expresión ilimitadamente, por ejemplo para ofender a las religiones, ni tampoco éstas deben imponer con violencia sus particulares razones.

Pero la fórmula resolutoria no es sencilla, y los matices son sumamente arduos, como también lo es la distinción entre dogma (verdad que es indiscutible en una doctrina) y tabú (prohibición religiosa sobre algo que se considera sagrado o impuro, como por ejemplo la representación gráfica –dibujada– del Profeta). Escribo esto porque, de haberse producido esta polémica en España, difícilmente el delito de ofensa a los sentimientos religiosos –contemplado en el artículo 525.1 del Código Penal– hubiera encajado en el supuesto de las caricaturas, ya que el redactado de este precepto no se refiere a los tabúes sino a los «dogmas»<sup>2</sup>.

La primera nota oficial de la Santa Sede sobre las viñetas de Mahoma condenó la violenta reacción islámica, alentada por algunos de sus dictadores políticos, pero también señaló la «provocación inadmisibile» para la fe de más de mil trescientos millones de musulmanes<sup>3</sup>. Según el cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, los chistes de Mahoma han sido «una manifestación de arrogancia madurada en países ricos y desa-

---

<sup>1</sup> De entre los teóricos de la ciudadanía, es interesante destacar la propuesta “culturalista” de B. PAREKH. En su clásico *Rethinking Multiculturalism*, Macmillan Press, London, 2000, entiende necesaria la búsqueda compartida de unos principios morales transculturales, que informen la ética pública y permitan articular una enriquecedora convivencia plural.

<sup>2</sup> «Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente, a quienes los profesan o practican.»

<sup>3</sup> *La Vanguardia* (10-2-2006).

rollados que no sienten respeto por la cultura de los otros. Una viñeta que a nosotros nos provoca una risotada, para otros es una ofensa.»<sup>4</sup>

Lo que ocurre es que, en estos momentos, hay que preguntarse qué es peor: si hacer uso de un derecho fundamental aunque pueda causar graves tensiones con la sensibilidad religiosa islámica, o, por el contrario, ejercitarlo con tanta inhibición y cautela que acabe desfigurándose... como podría estar sucediendo en Holanda desde el asesinato del cineasta Theo van Gogh<sup>5</sup>.

Si descendemos del ámbito global al europeo, se observa que la libertad de expresión no es omnímoda. Los sentimientos religiosos pueden actuar como un límite jurídico a la libertad de expresión, tal como reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en *Otto-Preminger-Institut contra Austria*<sup>6</sup> o *Wingrove contra Reino Unido*<sup>7</sup>. Pero, si descendemos del ámbito europeo al doméstico y nos atenemos a las resoluciones administrativas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en adelante CAC), el asunto no siempre resulta tan claro.

## 2. EL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

### EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Como es sabido, la Constitución reconoce en su artículo 20.1 la protección de los derechos a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», y a «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».

La libertad de expresión es «un derecho de libertad, por lo que básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales, en el proceso de comunicación. Sin embargo, en otro plano significa el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. El artículo 20 defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad en la expresión de las ideas y los

<sup>4</sup> *La Repubblica* (10-2-2006).

<sup>5</sup> En su película *Sumisión* denunciaba la ignominia del trato a la mujer en gran parte del mundo islámico.

<sup>6</sup> STEDH de 20 de septiembre de 1992.

<sup>7</sup> STEDH de 11 de noviembre de 1996. Véase al respecto el interesante estudio de J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «Libertad de expresión y libertad de religión. Comentarios en torno a algunas recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, núm. 11, mayo 2006, [www.iustel.com](http://www.iustel.com).

pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre»<sup>8</sup>.

Otras decisiones del TC han persistido también en estos argumentos, al entender que «el artículo 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.»<sup>9</sup>

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, confirmó en su articulado la libertad de expresión: así, el artículo 2.1 c) prevé el derecho a «recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento», mientras que el artículo 2.2 reconoce el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas «a divulgar y propagar su propio credo».

La importancia de la libertad de expresión, ínsita en los valores fundantes de cualquier democracia liberal –y que sabiamente ha iterado la jurisprudencia constitucional– es más que evidente. De ahí que el control democrático de esta libertad deba extremarse cuidadosamente, sobre todo cuando se vehicula a través de los medios audiovisuales. En tal sentido, el primer paso lo dio la Comunidad Autónoma de Catalunya, cuando, en razón de sus competencias estatutarias, el Parlament aprobó la *Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de*

<sup>8</sup> STC 12/1982, de 31 de marzo (FJ 3). El TC afirma que el artículo 20.1 CE «es ante todo un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley e incluso frente a la propia Ley si ésta intentara fijar otros límites distintos de los que la Constitución admite. De este modo, el derecho a comunicar y recibir comunicación veraz y el derecho a comunicar y recibir ideas y opiniones son derechos de libertad frente al poder que hay que considerar comunes a todos los ciudadanos» (FJ 3). En el mismo sentido, la STC 206/1990, de 17 de diciembre: «no debe olvidarse que el artículo 20 C.E., además de los derechos subjetivos de expresión e información garantiza el derecho de todos a recibir información, y tiene una dimensión de garantía de una institución fundamental cual es la opinión pública libre, que trasciende a lo que es común y propio de otros derechos fundamentales. [...] La comunicación pública libre no sólo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la información, sino también la preservación de un determinado modo de producirse de los medios de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder, como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión» (FJ 6).

<sup>9</sup> STC 159/1986, de 16 de diciembre (FJ 6).

*l'Audiovísual de Catalunya*. Y, más recientemente, se ha continuado con la importante *Llei 2/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya*.

Esta última –señala el Preámbulo– permite a la Generalitat intervenir en la regulación de los operadores y de los contenidos. Uno de sus fundamentales objetivos es proteger en los grandes mercados de consumo las especificidades culturales de Catalunya, y consolidar un modelo de servicio público en el ámbito audiovisual que, lógicamente, no es monopolístico.

La ley contiene numerosas referencias al factor religioso. Ya en el Preámbulo se señala que *«fixa un seguit de límits vinculats directament amb els principis, els valors i els drets constitucionals que poden legitimar l'acotament legal de l'exercici de les llibertats d'expressió i d'informació. Són límits vinculats al respecte de la dignitat de les persones, la manca de tota incitació a l'odi per motius de raça, sexe, religió o nacionalitat, la separació entre informacions i opinions i el respecte al principi de veracitat informativa»*. Asimismo, el artículo 26 de la ley establece como misión específica del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat *«g) La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents al territori de Catalunya.»*

El artículo 80 se refiere a los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales: *«En el marc de l'exercici legítim dels drets fonamentals de llibertat d'expressió i d'informació, la realització d'activitats de comunicació audiovisual se sotmet als límits següents: [...] b) No incitar a l'odi per motius de raça, sexe, religió o nacionalitat. c) Respectar el dret de tota persona a no ésser discriminada per raó de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.»*

Sobre la publicidad y la tele-venta el artículo 92 dispone que son ilícitas *«d) Les que atempten contra el respecte a la dignitat de les persones o a llurs conviccions religioses o polítiques. e) Les que discriminen per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.»* Igualmente, el artículo 94 considera que *«5. Els programes informatius, documentals, religiosos i infantils no poden incloure publicitat encoberta.»* Esta clase de programas –según el artículo 98.3 d)– no pueden ser objeto de interrupciones para emitir publicidad y tele-venta, salvo si duran más de treinta minutos. Y el precepto 108.1 *«Regles especial de publicitat i patrocini a la ràdio»* señala que *«c) No es poden incloure missatges publicitaris, de patrocini o publireportatges radiofònics en els programes informatius, en les emissions de serveis religiosos o en els programes infantils.»*

Por su parte, el Consell de l'Audiovisual es un ente público de carácter institucional que, como autoridad dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar tanto en el ámbito público como en el privado, actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. El artículo 1.2 de la *Llei 2/2000, de 4 de maig* estipula que el CAC, en el marco de sus competencias, «*vetlla pel respecte dels drets i llibertats [también la religiosa] que, en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts en la Constitució i en l'Estatut d'autonomia, i, especialment, garanteix el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de concessions, i també el compliment de l'eficàcia i l'observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria*». El artículo añade que «*El Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la neutralitat i l'honestedat informatives, i preserva el compliment de les normes relatives a l'ús de la llengua catalana i l'impuls de l'aranès.*»<sup>10</sup>

Para nuestro tema, la importancia del CAC radica en sus funciones, las cuales inciden en el derecho de acceso y en el respeto de los sentimientos religiosos de los telespectadores. El CAC ejerce sus funciones dentro del ámbito de la comunicación audiovisual que gestiona la Generalitat, sea directamente o en régimen de concesión o de habilitación, y también en aquellos supuestos en que se efectúen emisiones específicas para Catalunya o en otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidas al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Corresponde también al CAC –por virtud del artículo 10– «*d) assegurar l'observança dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament*» [...]; *f) «Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les seves competències, i també adoptar decisions vinculants per als seus destinataris pel que fa a les queixes formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual».*

A estas quejas vamos a referirnos de inmediato, puesto que dieron paso a la elaboración de una serie de criterios para la específica protección y tutela de los sentimientos religiosos.

<sup>10</sup> El artículo 115 de la *Llei 22/2005, de 29 de desembre*, señala que el Consell de l'Audiovisual tiene –entre otras funciones– la de «*b) Vetllar pel respecte del pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural, i també per l'equilibri territorial adequat en el conjunt del sistema audiovisual de Catalunya.*»

**3. ANEXO: ELS CRITERIS EN MATÈRIA DE TRACTAMENT DEL FET RELIGIÓS EN ELS  
PROGRAMES AUDIOVISUALS D'ENTRETENIMENT Y LA DECISIÓ 12/05,  
ASSUMPT: TELESÈRIE "PORCA MISÈRIA"**

Al igual que ocurrió con el artículo 4 c) de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión, al señalar que «La actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes principios: [...] c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico», el artículo 14 de la *Llei 10/1983, de 30 de maig*, reprodujo el respeto al pluralismo religioso, al decir que «*els principis inspiradors de la programació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió són: [...] c) El respecte a la llibertat d'expressió. d) El respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social. g) El respecte als principis d'igualtat i de no discriminació per raó de naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social.*»

Como se infiere, ambos preceptos van conectados a la protección de los sentimientos religiosos, que son aquellos que vinculan a los creyentes, siéndoles comunes porque proceden de una misma fe y moral compartidas<sup>11</sup>. Independientemente de adscripciones políticas o sociales, los sentimientos religiosos actúan como especial sensibilidad que cohesiona la percepción de los *cives-fideles*. Al ser un bien jurídico que requiere una protección similar a la que nuestro sistema brinda al derecho al honor, se exigen ponderaciones casuísticas. En estos supuestos, «cuando del ejercicio de la libertad de opinión [...] resulte afectado el derecho al honor de alguien, nos encontraremos ante un conflicto de derechos, ambos de rango fundamental, lo que significa que [...] se impone una necesaria y casuística ponderación.»<sup>12</sup>

La protección de los sentimientos religiosos como bien jurídico alcanza a todas las confesiones, figuren (o no) inscritas, y tengan (o no) Acuerdos

<sup>11</sup> La doctrina los ha definido como aquellos «sentimientos que proceden de la fe y la moral católicas [...] se trata de unos sentimientos que son consecuencia de la objetivación, por parte de los católicos, de una fe y una moral [y que conducen a] respetar las creencias dogmáticas y morales del grupo social católico», *vid.*, C. SORIA, «La tutela del sentimiento religioso en los medios de comunicación social», *Ius Canonicum*, XXVII, 1987, pág. 324. Otros autores hablan de "sensibilidad religiosa": «la sensibilidad religiosa es un bien protegible, y su protección jurídica exige que el derecho a la libertad de expresión –artículo 20 de la Constitución– sea ejercido dentro de sus límites, ya que lo religioso no es un aspecto accesorio, sino esencial de la persona», *vid.*, M. CAMARERO, «La protección de los intereses religiosos en España en los medios de comunicación y en ambientes especiales», *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. I, 1985, págs. 369 y ss. Véase también: J. FERREIRO, «La protección de los sentimientos religiosos en los acuerdos con la Iglesia católica», *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XI, 1995.

<sup>12</sup> STC 104/1986, de 17 de julio (FJ 5).

cooperativos<sup>13</sup>. Con todo, conviene apuntar que el artículo XIV del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, suscrito entre el Estado y la Santa Sede, dirige un mandato que, de suyo, se extiende también a aquellas Comunidades Autónomas que son titulares de medios de comunicación social: «Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española.»

Por lo que atañe a la salvaguardia de los sentimientos religiosos, el CAC se ha pronunciado en dos ocasiones, y en ambas ha debido responder a las protestas formales de la plataforma católica E-Cristians<sup>14</sup>. Los programas de TV3 objeto de quejas fueron varios: *Plats Bruts*, *La Columna*, *Dinamita* y *7 de Notícies*. El CAC elaboró unas normas con el propósito de orientar algunos contenidos de estos programas de entretenimiento, que la plataforma entendía que solían vulnerar los sentimientos religiosos de los telespectadores católicos<sup>15</sup>.

Los *Criteria en matèria de tractament del fet religiós en els programes audiovisuals d'entreteniment*, aprobados en la sesión de 9 de mayo de 2002, por el pleno del CAC, fueron los siguientes:

1. *Respectar i fomentar la llibertat religiosa de les persones com a dret fonamental del qual deriven altres drets fonamentals;*
2. *Respectar i fomentar la llibertat religiosa en la seva dimensió col·lectiva com a valor social positiu, fet que implica un respecte a totes les Confessions o Entitats religioses, considerades i reconegudes per l'ordenament jurídic;*
3. *Respectar els sentiments individuals i col·lectius, de forma que no s'utilitzin indegudament, encara que es faci en clau d'humor aquells símbols representatius per a les persones que professen una confessió religiosa;*
4. *Respectar el pluralisme religiós, en el marc dels valors universals, els drets fonamentals i la convivència en democràcia i les diferents actituds de la ciutadania en relació a l'ateisme i l'agnosticisme;*
5. *Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'expressions que puguin suscitar discriminacions per motius religiosos;*

<sup>13</sup> En este sentido se pronuncia A. FERNÁNDEZ-CORONADO, «Una perspectiva eclesialista de la protecció penal de la llibertat de consciència», *Laicidad y Libertades*, núm.1, diciembre 2001, pág. 268.

<sup>14</sup> <http://www.e.cristians.net>

<sup>15</sup> El artículo 10 i) de la *Llei 2/2000, de 4 de maig*, señala que «El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en l'àmbit de la seva actuació, té les funcions següents: [...] Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual».

6. *Aplicar el principi d'igualtat de tracte per a totes les confessions independentment de la incidència sociològica que tinguin;*
7. *Acceptar que en l'exercici de la llibertat d'expressió, entesa aquesta com l'emissió de judicis personals i subjectius, d'opinions, de creences o de pensaments, els personatges públics o amb notorietat pública tinguin que suportar per la seva condició, el que les seves actuacions en el desenvolupament en l'exercici dels seus càrrecs i funcions es vegin sotmesos en l'escrutini de l'opinió pública i en conseqüència, s'emetin judicis de valor en relació a llurs actuacions;*
8. *Acceptar que la crítica legítima en afers d'interès públic empara aquelles que puguin molestar, inquietar o disgustar en l'ànim d'un determinat conjunt de la ciutadania;*
9. *Rebutjar que en virtut de la llibertat d'expressió, s'emetin apel·latius o expressions formalment injurioses desconnectades de la crítica legítima i innecessària per al missatge que vol difondre's i que pugui produir un dany injustificat al prestigi de les institucions religioses o a la dignitat de les persones que les hi representen;*
10. *Els operadors tenen que ser conscients a priori –atesa la societat cada vegada més plural, heterogènia, multicultural i secularitzada– mitjançant l'establiment de codis deontològics, de l'actitud a adoptar quant el tractament de les creences o dels símbols religiosos en els programes d'entreteniment i de la seva posterior repercussió i abast que aquest tindria en el conjunt de la ciutadania<sup>16</sup>.*

Más recientemente, E-Cristians ha vuelto a reclamar la aplicación de estos criterios a raíz de unas palabras del protagonista de la exitosa serie de ficción *Porca misèria*, que en un capítulo lanzaba una muy concreta diatriba, invitando a que en el Impuesto de la Declaración de la Renta (IRPF) no se marcara la casilla que se destina a ayudar a la Iglesia Católica.

Dijo el protagonista:

«¡Mierda, he puesto una cruz en la casilla de los curas! La madre que me parió, sólo me faltaba dar pasta a ese grupo de reaccionarios que prohíben

<sup>16</sup> Estos criterios son fiel reflejo de la potestad de autorregulación, tratada en su día por M<sup>a</sup>. J. GUTIÉRREZ, «La libertad religiosa en los medios de comunicación», *Ius Canonicum*, vol. XLII, 2002, págs. 308-309: «La autorregulación, por su parte, con lo que conlleva de autorreflexión, de concienciación sobre los contenidos a regular, e incluso de formación sobre la materia a tratar, puede ser el mejor camino hacia una efectiva tutela de los derechos y valores protegibles. Quizá [...] sea la única vía eficaz para encontrar el equilibrio entre el ejercicio de las libertades de comunicación y de la libertad religiosa.»

los abortos, los condones y los matrimonios gays, no fuera caso que todos se casaran en masa.»<sup>17</sup>

El CAC desestimó las reclamaciones porque a su juicio no se vulneró la normativa vigente, ni tampoco los *Criteria*, aunque los mismos recomiendan –como se ha visto– que sean respetados los sentimientos religiosos individuales y colectivos.

Es cierto que el actor hablaba por boca de su personaje, pero ello no obsta para que nos preguntemos si pudo haber *animus iniuriandi*, es decir, intención de ofender. Recuérdese, en este sentido, que el delito de ofensa a los sentimientos religiosos del artículo 525.1 del Código Penal exige –con la preposición «para»– la existencia de dolo directo: «los que *para* ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan [...] escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente, a quienes los profesan o practican.»

¿Quería el actor ofender los sentimientos religiosos de los católicos, o simplemente criticar a la Iglesia y a sus ministros? ¿Puede considerarse escarnio o vejación la diatriba del protagonista? Si pensamos que el escarnio –según el diccionario de la Real Academia de la Lengua– es una burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar, y que la vejación es la acción y efecto de vejar, maltratar o molestar a alguien, concluiremos que las fronteras entre lo que es y no es delito se presentan brumosas<sup>18</sup>.

Pese a la desestimación, el CAC añade que «recordará al operador de televisión el cuidado que ha de tener en el trato de las creencias o símbolos religiosos tomando en consideración la repercusión y alcance que tienen en el conjunto de la ciudadanía y que podrían producir perjuicio en algún sector o institución.»

Para E-Cristians, hasta ahora con las denuncias que se han producido nunca se ha obtenido ningún resultado. En un primer momento se argumentó que no existía criterio definitivo. Después, tras largos meses de conversaciones y aportación de precedentes jurídicos en el ámbito europeo se logró que el CAC elaborara los mencionados *Criteria*, con lo que parecía que se podría garantizar un trato más razonable del hecho religioso, no ofensivo ni blasfemo contra

<sup>17</sup> En ese mismo capítulo, el actor también se quejó del expolio fiscal al que el Estado español somete a Catalunya: «¿Tu sabes lo que tendremos que pagar a estos cabrones? Total, para que el AVE acabe llegando a velocidad de tortuga, la sanidad y la escuela pública continúen arruinadas y no haya ni una puta piscina pública. Esto es un expolio y encima has de oír que eres un insolidario.»

<sup>18</sup> Sobre el 525.1 del Código Penal, véanse las observaciones de M<sup>a</sup>. REYES LEÓN y M<sup>a</sup>. DEL MAR LEAL, «La tutela de la libertad religiosa en el Código Penal: Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal», <http://noticias.jurídicas.com>

la Iglesia Católica. Por su parte, TV3 tenía el deber de elaborar un código de conducta sobre este tema, pero la plataforma recuerda que, transcurridos más de tres años, todavía no se ha redactado<sup>19</sup>.

En la *Decisió 12/05, Assumpte: Telesèrie "Porca misèria", emesa el 13 de novembre de 2005, a les 21.35 hores, per TV3*, el dictamen del CAC fue el siguiente<sup>20</sup>:

*Els mesos de novembre i desembre de 2005, 48 persones formulen una reclamació en relació amb la telesèrie esmentada. Les persones reclamants manifesten que en el decurs de la telesèrie es va faltar al respecte, de manera greu, a l'Església catòlica i a aquells que professen aquesta religió.*

*Els serveis tècnics del Consell han analitzat el capítol de la telesèrie objecte de reclamació: el primer de la segona temporada. Porca misèria és una telesèrie que explica, de manera coral, la vida d'un seguit de personatges que tenen entre 30 i 40 anys.*

*Els aspectes tractats en aquest episodi són:*

*Relació entre el Pere i la Laia, separats per l'opció laboral de la Laia, que ara treballa als EUA.*

*– Feina de la Laia en uns laboratoris dels EUA.*

*– Acomiadament de la Natàlia, que està disposada a presentar batalla legal per millorar les condicions d'aquest acomiadament.*

*– Relació sentimental entre la Natàlia i el Jordi, qui, a més, és el seu advocat.*

*– Casament entre la Sònia i el Roger.*

*– Recerca de diners per part de l'Alex per tal de comprar el iot on viu.*

*En una de les seqüències de l'episodi que s'analitza, amb una durada de 28 segons, Pere Brunet (paper interpretat per l'actor Joel Joan) fa la declaració de renda, ajudat per telèfon per la Laia (paper interpretat per l'actriu Anna Sahun). L'acció se situa a quarts de tres de la matinada i en un temps que s'identifica com a present, on el Pere mostra el seu cansament després del "pitjor directe de la seva vida".*

*La Laia es mostra contrariada per haver de fer en hores de feina, via telefònica, la declaració del seu company, el qual es queixa, amb un alt grau d'enuig, de la manca d'infraestructures i de l'injust finançament de Catalunya en relació amb les càrregues fiscals que s'han d'aportar a l'erari públic. Mentre exposa aquests arguments, el seu grau d'indignació i contrarietat augmenta quan per equivocació marca amb una creueta la casella de l'aportació a l'Església catòlica.*

<sup>19</sup> Informació extraïda de [www.forumlibertas.com](http://www.forumlibertas.com)

<sup>20</sup> Agradezco a los responsables de E-Cristians el suministro del dictamen.

*Així mateix, del diàleg i del to emprats es denota una clara actitud contrària i de ridiculització vers la donació de part dels impostos a l'Església catòlica.*

*El programa està senyalitzat per l'operador com a no recomanat per a menors de 13 anys.*

- 1. Atès l'informe jurídic del 15 de desembre de 2005, es constata que el capítol emès el 13 de novembre de 2005 de la telesèrie Porca misèria no vulnera la normativa reguladora de la programació audiovisual.*
- 2. El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, a proposta de la Comissió de Continguts, en la reunió que ha tingut lloc l'11 de gener de 2006, amb la deliberació prèvia i d'acord amb el que estableix la lletra f de l'article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, emet la decisió següent:*

*El Consell desestima les reclamacions atès que considera que l'escena objecte de queixes no vulnera la normativa vigent. Tampoc no es veuen vulnerats els criteris del CAC en matèria del tractament del fet religiós, els quals si bé recomanen que siguin respectats "els sentiments individuals i col·lectius" en la utilització dels símbols religiosos, també consideren que "la crítica legítima en assumptes d'interès públic empara aquelles que puguin molestar, inquietar o disgustar en l'ànim d'un determinat conjunt de la ciutadania".*

*No obstant això, el Consell recorda a l'operador de televisió la cura especial que hauria de tenir pel que fa al tractament de les creences o dels símbols religiosos tenint en compte la repercussió i l'abast que tenen en el conjunt de la ciutadania, i que podrien produir perjudici en algun sector o institució.*

- 1. El Consell acorda comunicar aquesta decisió a les persones reclamants i a Televisió de Catalunya.*

Barcelona, 11 de gener de 2006  
El president,  
Josep M. Carbonell i Abelló.